

**No. 35454**

---

**Argentina  
and  
Bolivia**

**Agreement between the Argentine Republic and the Republic of Bolivia on the transfer of convicted nationals and the execution of criminal sentences. La Paz, 19 November 1996**

**Entry into force:** *22 October 1998 by notification, in accordance with article XVII*

**Authentic text:** *Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Argentina, 22 January 1999*

---

**Argentine  
et  
Bolivie**

**Accord entre la République argentine et la République de Bolivie relatif au transfert des condamnés nationaux et à l'exécution des sentences pénales. La Paz, 19 novembre 1996**

**Entrée en vigueur :** *22 octobre 1998 par notification, conformément à l'article XVII*

**Texte authentique :** *espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Argentine, 22 janvier 1999*

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

**CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE  
BOLIVIA  
SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS  
Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES**

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante denominados "las Partes";

DESEOSOS de fomentar la cooperación mutua en materia de justicia penal;

ESTIMANDO que el objetivo de las penas es la reinserción social de las personas condenadas;

CONSIDERANDO que para el logro de ese objetivo sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la comisión de un delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad;

CONVIENEN lo siguiente:

**ARTÍCULO I**

1. Las penas impuestas en Bolivia a nacionales de la República Argentina podrán ser cumplidas en la Argentina de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
2. Las penas impuestas en la Argentina a nacionales de la República de Bolivia podrán ser cumplidas en Bolivia de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
3. La calidad de nacional será considerada en el momento de la solicitud del traslado.

**ARTÍCULO II**

Para los fines de este Convenio se entiende que:

a) "Estado Sentenciador" es la Parte que condenó al interno y de la cual el interno habrá de ser trasladado.

b) "Estado Receptor" es la Parte a la cual el interno habrá de ser trasladado.

c) "Interno" es la persona que está cumpliendo una sentencia condenatoria a pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario.

### ARTÍCULO III

Las Partes comunicarán por la vía diplomática la designación de la autoridad encargada de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio.

### ARTÍCULO IV

Para que se pueda proceder en la forma prevista por este Convenio, deberán reunirse las siguientes condiciones:

a) Que la sentencia sea firme y definitiva, es decir, que no esté pendiente recurso legal alguno, incluso procedimientos extraordinarios de apelación o revisión;

b) Que la condena no sea la pena de muerte, a menos que ésta haya sido conmutada;

c) Que la pena que esté cumpliendo el interno tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria o haya sido fijada posteriormente por la autoridad competente;

d) Que la parte de la condena que faltare cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea no menor a un año; y

e) Que el interno haya cumplido con el pago de multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria de toda índole que estén a su cargo conforme a lo dispuesto en la sentencia condenatoria; o que garantice su pago a satisfacción del Estado Sentenciador.

### ARTÍCULO V

1. Las autoridades competentes de las Partes informarán a todo interno nacional de la otra Parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este Convenio y sobre las consecuencias jurídicas que derivarían del traslado.

2. En caso que lo solicite, el interno podrá comunicarse con el Cónsul de su país, quien a su vez podrá contactar a la autoridad competente del Estado Sentenciador, para solicitarle se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del interno.
3. La voluntad del interno de ser trasladado deberá ser expresamente manifestada por escrito. El Estado Sentenciador deberá facilitar, si lo solicita el Estado Receptor, que éste compruebe que el interno conoce las consecuencias legales que aparejará el traslado y que da el consentimiento de manera voluntaria.

#### ARTÍCULO VI

1. El pedido de traslado deberá ser efectuado por el Estado Receptor al Estado Sentenciador por la vía diplomática.
2. Para proceder al pedido de traslado, el Estado Receptor evaluará el delito por el que el interno ha sido condenado, los antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que el interno tenga con la sociedad del Estado Receptor y toda otra circunstancia que pueda constituirse como factor positivo para la rehabilitación social del interno en caso de cumplir la condena en el Estado Receptor.
3. El Estado Receptor tendrá absoluta discreción para proceder o no a efectuar la petición de traslado al Estado Sentenciador.

#### ARTÍCULO VII

1. El Estado Sentenciador analizará el pedido y comunicará su decisión al Estado Receptor.
2. El Estado Sentenciador podrá negar la autorización del traslado sin expresar la causa de la decisión.
3. Negada la autorización del traslado, el Estado Sentenciador podrá revisar ulteriormente su decisión a instancia del Estado receptor, para viabilizar el traslado

### ARTÍCULO VIII

1. Si se aprobara el pedido, las Partes convendrán el lugar y la fecha de la entrega del interno y la forma en que se hará efectivo el traslado.

El Estado Receptor será el responsable de la custodia y transporte del interno desde el momento de la entrega.

2. El Estado Receptor no tendrá derecho a reembolso alguno por gastos contraídos por el traslado o cumplimiento de la condena en su territorio.
3. El Estado Sentenciador suministrará al Estado Receptor los testimonios de sentencia y demás documentación que pueda necesitarse para el cumplimiento de la condena, así como los informes complementarios que el Estado Receptor juzgare pertinente. Tales testimonios y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el Estado Receptor.
4. A solicitud del Estado Sentenciador, el Estado Receptor proporcionará informes sobre el estado de ejecución de la sentencia del interno trasladado conforme el presente Convenio, incluyendo aspectos concernientes a su libertad condicional u otros subrogantes penales.

### ARTÍCULO IX

El interno trasladado no podrá ser nuevamente enjuiciado en el Estado Receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado Sentenciador y su posterior traslado.

### ARTÍCULO X

1. El Estado Sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales.
2. Sólo el Estado Sentenciador podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.
3. Si así lo hiciere, comunicará la decisión al Estado Receptor, informándole sobre las consecuencias que en la legislación del Estado Sentenciador produce la decisión adoptada.

4. El Estado Receptor deberá adoptar de inmediato las medidas que correspondan a tales consecuencias.

#### ARTÍCULO XI

La ejecución de la sentencia se regirá por las leyes del Estado Receptor, incluso las condiciones para el otorgamiento y la revocación de la libertad condicional, anticipada o vigilada.

#### ARTÍCULO XII

Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado Sentenciador.

#### ARTÍCULO XIII

1. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional o de la libertad condicional, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado Receptor.
2. La autoridad judicial del Estado Sentenciador solicitará las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que se diligenciará por la vía diplomática.
3. Para los efectos del presente artículo, la autoridad judicial del Estado Receptor podrá adoptar las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al exhortante sobre la forma en que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

#### ARTÍCULO XIV

Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes puedan tener, independientemente del presente Convenio, para conceder o aceptar el traslado de un menor infractor.

ARTÍCULO XV

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Convenio.

ARTÍCULO XVI

Este Convenio será aplicable al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad o con posterioridad a su entrada en vigor.

ARTÍCULO XVII

1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la recepción de la última nota diplomática por la que las Partes se notifiquen haber cumplimentado los requisitos constitucionales respectivos.
2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.

En testimonio de lo cual los representantes de las Partes, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

Hecho en la ciudad de la Paz, a los 19 días del mes de noviembre del año 1996, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA REPUBLICA ARGENTINA



POR LA REPUBLICA DE BOLIVIA



[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF BOLIVIA ON THE TRANSFER OF CONVICTED NATIONALS AND THE EXECUTION OF CRIMINAL SENTENCES

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Bolivia, hereinafter referred to as "the Parties";

Desiring to promote mutual cooperation in the field of criminal justice;

Bearing in mind that the aim of punishment is to reintegrate convicted persons into society;

Considering that in order to achieve that aim it would be beneficial to afford nationals who have been deprived of their liberty abroad for committing an offence the opportunity to serve their sentence in their country of nationality;

Have agreed as follows:

*Article I*

1. Sentences imposed in Bolivia on nationals of the Argentine Republic may be served in Argentina in accordance with the provisions of this Agreement.
2. Sentences imposed in Argentina on nationals of the Republic of Bolivia may be served in Bolivia in accordance with the provisions of this Agreement.
3. Nationality status shall be considered at the time of the application for transfer.

*Article II*

For the purposes of this Agreement:

- (a) "Sentencing State" shall mean the Party in which the person was convicted and from which the person is to be transferred;
- (b) "Receiving State" shall mean the Party to which the convicted person is to be transferred;
- (c) "Convicted person" shall mean a person who is serving a sentence involving deprivation of liberty in a penal establishment.

*Article III*

The Parties shall inform each other, through the diplomatic channel, of the designated authorities responsible for giving effect to the provisions of this Agreement.

*Article IV*

Action may be taken in the manner set forth in this Agreement only on condition:

- (a) That the sentence is final and definitive; in other words, that no legal proceedings, including an extraordinary appeal or review proceedings, are pending;
- (b) That the sentence is not a sentence of death, except where it has been commuted;
- (c) That the duration of the sentence being served is specified in the judgement or has been fixed subsequently by the competent authority;
- (d) That at least one year of the sentence remains to be served at the time when the application is made; and
- (e) That the convicted person has paid or guaranteed payment, to the satisfaction of the sentencing State, of the fines, legal expenses, civil damages or pecuniary penalties of any kind for which he or she is liable under the terms of the sentence.

*Article V*

1. The competent authorities of the Parties shall inform all convicted persons who are nationals of the other Party of the transfer option available to them under this Agreement and of the legal consequences of such a transfer.
2. If the convicted person so requests, he or she may contact the Consul of his or her country, who, in turn, may contact the competent authority of the sentencing State to request the preparation of the records and documents relating to the convicted person.
3. The convicted person shall expressly indicate, in writing, his or her desire to be transferred. The sentencing State shall give the receiving State an opportunity, if the latter so requests, to verify that the convicted person is aware of the legal consequences of such a transfer and that his or her consent is being given voluntarily.

*Article VI*

1. The application for transfer shall be submitted by the receiving State to the sentencing State through the diplomatic channel.
2. Before applying for the transfer, the receiving State shall weigh the offence for which the convicted person was sentenced, his or her previous criminal record, his or her state of health, any connections which he or she may have with the society of the receiving State and any other circumstance that may be regarded as a positive factor for the person's social rehabilitation in the event that he or she serves the sentence in the receiving State.
3. The receiving State shall have full discretion in determining whether or not to submit an application for transfer to the sentencing State.

*Article VII*

1. The sentencing State shall study the application and shall communicate its decision to the receiving State.
2. The sentencing State may refuse to authorize the transfer without stating the reason for its decision.

3. Having refused such authorization, the sentencing State may, at the request of the receiving State, subsequently review its decision with a view to effecting the transfer.

*Article VIII*

1. If the application is approved, the Parties shall agree on a place and date for the convicted person to be handed over and on the manner in which the transfer is to be effected.

The receiving State shall be responsible for guarding and transporting the convicted person from the moment he or she is handed over.

2. The receiving State shall not be entitled to any reimbursement for expenses incurred by it in the transfer or in the execution of the sentence in its territory.

3. The sentencing State shall provide the receiving State with certified copies of the judgement and any other documentation that may be necessary for the execution of the sentence, together with such additional reports as the receiving State may deem appropriate. If the receiving State so requests, such certified copies and documentation shall be authenticated.

4. At the request of the sentencing State, the receiving State shall provide reports on the status of execution of the sentence of a convicted person transferred in accordance with this Agreement, including information on the granting of parole or other alternative penalties.

*Article IX*

A convicted person who has been transferred may not be tried again in the receiving State for the same offence which gave rise to the sentence imposed by the sentencing State and to the person's subsequent transfer.

*Article X*

1. The sentencing State shall have exclusive jurisdiction in respect of any new proceedings, regardless of their form, intended to quash, modify or set aside judgements handed down by its courts.

2. The sentencing State alone may grant an amnesty or pardon, or review, remit or commute the sentence imposed.

3. Should it do so, it shall notify the receiving State of its decision and inform it of the consequences which the decision has under the legislation of the sentencing State.

4. The receiving State shall immediately take such measures as may be required by such consequences.

*Article XI*

The execution of the sentence, including the conditions for the granting and revocation of early or supervised conditional release or parole, shall be governed by the laws of the receiving State.

*Article XII*

The receiving State shall not execute any prison sentence in such a way as to prolong the duration of the deprivation of liberty beyond the term of imprisonment imposed by the sentence of the court of the sentencing State.

*Article XIII*

1. If a national of one Party is serving a sentence imposed by the other Party under the regime of early or supervised conditional release or parole, he or she may serve the sentence under the supervision of the authorities of the receiving State.

2. The judicial authority of the sentencing State shall request the relevant measures of supervision by means of a letter rogatory served through the diplomatic channel.

3. For the purposes of this article, the judicial authority of the receiving State may take the measures of supervision requested, keep the requesting authority informed of the manner in which they are being implemented and immediately inform it of any failure by the convicted person to fulfil his or her obligations.

*Article XIV*

No provision of this Agreement shall be interpreted as limiting any powers which the Parties may have, independently of this Agreement, to grant or accept the transfer of a juvenile offender.

*Article XV*

The Parties undertake to adopt the necessary legislative measures and to establish suitable administrative procedures for the fulfilment of the purposes of this Agreement.

*Article XVI*

This Agreement shall apply to the execution of sentences imposed either before or after its entry into force.

*Article XVII*

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last diplomatic note by which the Parties notify each other of their compliance with their respective constitutional requirements.

2. This Agreement shall remain in force indefinitely. Either Party may denounce it by giving written notice through the diplomatic channel. The denunciation shall take effect 180 days after such notice has been given.

In witness whereof the representatives of the Parties, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at La Paz on 19 November 1996, in two originals, both texts being equally authentic.

For the Argentine Republic:

GUIDO DI TELLA

For the Republic of Bolivia:

ANTONIO ARANÍBAR QUIROGA

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE DE  
BOLIVIE RELATIF AU TRANSFERT DES CONDAMNÉS NATIONAUX  
ET À L'EXÉCUTION DES SENTENCES PÉNALES

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République de Bolivie, ci-après dénommés "les Parties";

Désireux de favoriser la coopération mutuelle en matière de justice pénale;

Estimant que l'objectif des peines est la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant que pour atteindre cet objectif il y aurait intérêt à donner aux nationaux privés de leur liberté à l'étranger pour avoir commis un délit la possibilité de purger leur peine dans le pays de leur nationalité;

Sont convenus de ce qui suit :

*Article premier*

1. Les peines infligées en Bolivie à des nationaux de la République argentine pourront être purgées en Argentine conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Les peines infligées en Argentine à des nationaux de la République de Bolivie pourront être purgées en Bolivie conformément aux dispositions du présent Accord.

3. La qualité de national sera considérée au moment de la demande de transfèrement.

*Article II*

Aux fins du présent Accord :

a) L'expression " État de condamnation " désigne la Partie sur le territoire de laquelle la personne a été condamnée et à partir de laquelle le délinquant devra être transféré;

b) L'expression " État d'accueil " désigne la Partie vers laquelle la personne condamnée devra être transférée;

c) L'expression " personne condamnée " désigne la personne purgeant une sentence condamnatrice à une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire.

*Article III*

Les Parties se communiqueront par la voie diplomatique le nom des autorités qui seront chargées d'exercer les fonctions prévues dans le présent Accord.

*Article IV*

Pour qu'il puisse être procédé dans la forme prévue au présent Accord, les conditions suivantes devront être réunies :

a) Le jugement doit être ferme et sans appel, c'est-à-dire qu'aucun recours légal quelconque ne doit être pendant, y compris les procédures extraordinaires d'appel ou de révision;

b) La condamnation ne doit pas être une condamnation à mort, à moins que celle-ci ait été commuée;

c) La durée de la peine devant être purgée sera spécifiée dans la sentence condamnatrice ou aura été fixée postérieurement par l'autorité compétente;

d) La partie de la condamnation qui reste à purger au moment de la demande doit être d'au moins un an; et

e) La personne condamnée doit avoir satisfait au paiement des amendes, frais de justice, dommages civils ou condamnation pécuniaire de toute nature mise à sa charge conformément aux dispositions de la sentence condamnatrice ou doit en garantir le paiement à la satisfaction de l'État de condamnation.

#### *Article V*

1. Les autorités compétentes des Parties informeront toute personne condamnée qui est un ressortissant de l'autre Partie de la possibilité d'un transfèrement en vertu du présent Accord et des conséquences juridiques en découlant.

2. Si la personne condamnée le demande, elle pourra communiquer avec le Consul de son pays, lequel, à son tour, pourra entrer en contact avec l'autorité compétente de l'État de condamnation pour demander que soient établis les antécédents et les documents ayant trait à la personne condamnée.

3. La volonté de la personne condamnée d'être transférée devrait être exprimée par écrit de manière expresse. L'État de condamnation doit donner à l'État d'accueil qui pourrait le demander la possibilité de vérifier que la personne condamnée est au courant des conséquences juridiques qu'entraîne le transfèrement et qu'elle donne son consentement de sa propre volonté.

#### *Article VI*

1. La demande de transfèrement devra être présentée par l'État d'accueil à l'État de condamnation par la voie diplomatique.

2. Avant de présenter la demande de transfèrement, l'État d'accueil évaluera le délit pour lequel le délinquant a été condamné, ses antécédents pénaux, son état de santé, les liens qui le rattachent à la société de l'État d'accueil et toute autre circonstance qui pourrait être considérée comme un facteur positif pour la réhabilitation sociale du délinquant s'il purgeait sa peine dans l'État d'accueil.

3. L'État d'accueil a discrétion absolue pour faire droit ou non à la demande de transfèrement vers l'État de condamnation.

*Article VII*

1. L'État de condamnation examinera la demande et communiquera sa décision à l'État d'accueil.
2. L'État de condamnation pourra refuser l'autorisation de transfèrement sans avoir à motiver sa décision.
3. En cas de refus de l'autorisation de transfèrement, l'État de condamnation peut, à la demande de l'État d'accueil, réviser sa décision en vue d'effectuer le transfèrement.

*Article VIII*

1. Si la demande est approuvée, les Parties conviendront du lieu et de la date de la remise de la personne condamnée et de la forme dans laquelle s'effectuera le transfèrement. L'État d'accueil sera responsable de la garde et du transport de la personne condamnée à partir du moment de sa remise.
2. L'État d'accueil n'aura droit à aucun remboursement pour les frais encourus pour le transfèrement ou pour l'exécution de la peine sur son territoire.
3. L'État de condamnation fournira à l'État d'accueil des copies certifiées conformes du jugement et tous autres documents pouvant être nécessaires pour l'exécution de la condamnation, ainsi que tous autres rapports supplémentaires que l'État d'accueil peut juger nécessaires. Si l'État d'accueil le demande, lesdites copies certifiées conformes et lesdits documents devront être authentifiés.
4. À la demande de l'État de condamnation, l'État d'accueil transmettra des rapports sur l'État d'exécution de la condamnation d'une personne transférée conformément aux dispositions du présent Accord, y compris des renseignements sur l'octroi de la liberté conditionnelle ou toute autre peine.

*Article IX*

Une personne condamnée qui a été transférée ne pourra pas être à nouveau jugée dans l'État d'accueil pour le délit ayant motivé la peine infligée par l'État de condamnation et son transfèrement postérieur.

*Article X*

1. L'État de condamnation aura juridiction exclusive en ce qui concerne toute procédure, quelle qu'en soit la forme, destinée à annuler, modifier ou rendre sans effet les jugements prononcés par ses tribunaux.
2. Seul l'État de condamnation pourra accorder l'amnistie, la remise, la révision, la grâce ou la commutation de la peine infligée.
3. Dans ce cas, l'État de condamnation communiquera cette décision à l'État d'accueil en l'informant des conséquences de la décision adoptée selon la législation de l'État de condamnation.

4. L'État d'accueil devra prendre sans délai les mesures requises par les conséquences en question.

*Article XI*

L'exécution du jugement, y compris les conditions prévues pour l'octroi et la révocation de la liberté conditionnelle préparatoire, anticipée ou surveillée, sera régie par la législation de l'État d'accueil.

*Article XII*

L'État d'accueil n'exécutera aucune condamnation à une peine de prison de telle manière qu'elle prolonge la durée de privation de liberté au-delà de la période d'emprisonnement infligée par le tribunal de l'État de condamnation.

*Article XIII*

1. Si un ressortissant d'une Partie purge une peine imposée par l'autre Partie sous le régime d'une liberté conditionnelle ou préparatoire, anticipée ou surveillée, il pourra purger ladite peine sous la surveillance des autorités de l'État d'accueil.

2. L'autorité judiciaire de l'État de condamnation demandera les mesures de surveillance applicables, au moyen d'une commission rogatoire qui sera adressée par la voie diplomatique.

3. Aux fins du présent Article, l'autorité judiciaire de l'État d'accueil pourra prendre les mesures de surveillance demandées, tiendra au courant l'autorité ayant délivré la commission rogatoire de la manière dont ces mesures sont mises en oeuvre et informera immédiatement en cas de non exécution par la personne condamnée des obligations contractées par cette dernière.

*Article XIV*

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme limitant les pouvoirs que les Parties peuvent avoir, indépendamment du présent Accord, d'accorder ou d'accepter le transfèrement d'un délinquant mineur.

*Article XV*

Les Parties s'engagent à prendre les mesures législatives nécessaires et à établir les mécanismes administratifs adéquats par l'exécution des dispositions du présent Accord.

*Article XVI*

Le présent Accord peut être appliqué à l'exécution des peines prononcées antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.

*Article XVII*

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière note diplomatique par laquelle les Parties se notifieront l'accomplissement de leurs conditions constitutionnelles respectives.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie. Chacune des Parties pourra le dénoncer moyennant notification écrite par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet 180 jours après la date de ladite notification.

En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à La Paz le 19 novembre 1996, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.

Pour la République argentine :

GUIDO DI TELLA

Pour la République de Bolivie :

ANTONIO ARANÍBAR QUIROGA

